

Olac Fuentes Molinar

Las épocas de la universidad mexicana

El propósito de este trabajo es proponer una periodización para el análisis del desarrollo de la educación superior mexicana en su época "contemporánea", tomando como eje básico las transformaciones en las relaciones políticas e ideológicas establecidas entre las instituciones educativas y el Estado posrevolucionario.

Por contemporáneo, me refiero al periodo que se inicia a mediados de la década de los cuarenta y que se extiende hasta nuestros días. Es a partir del gobierno de Ávila Camacho, y no antes, que la educación superior adquiere las tendencias centrales que la conducen a su situación actual; por eso, pese a las duraderas influencias de una tradición más antigua, para las instituciones de hoy la fase previa a la redefinición avilacamachista es la prehistoria.

El elemento esencial del periodo contemporáneo, la integración funcional de la educación superior a los proyectos del Estado y a los procesos de transformación de la sociedad mexicana, nace precisamente en los cuarenta. Durante los primeros veinte años del régimen posrevolucionario esta relación de correspondencia es muy débil, en algunos momentos, y en otros, los más, lo que existe es una relación antagónica y hostil. En realidad, el propósito que anunciara Vasconcelos, incorporar a los universitarios a las tareas del nuevo Estado y a la "civilización" de la revolución, nunca se materializó con plenitud en el plano institucional. No fue así, entre otras razones, porque las pretensiones iluministas de dirección de los líderes intelectuales de la universidad no tenían cabida ni en el esquema de poder, ni en la orientación jacobina y populista que se construyó y desarrolló bajo el impulso del grupo sonoreense. El destino del propio Vasconcelos ejemplifica al extremo esa incorporación inviable.

Es en los términos de este distanciamiento entre el proyecto estatal y las universidades como hay que explicarse el proceso de la autonomía de la Universidad de México entre 1929 y 1933. Si bien es cierto que en las luchas estudiantiles de entonces se mezclaron orientaciones diversas, la posición hegemónica corresponde al antiestatismo de derecha, arropado en la reivindicación de la democracia liberal, que se encarna en el

vasconcelismo. Al final, es el ecléctico idealismo de Antonio Caso el que proporciona la doctrina de la libertad del quehacer universitario, expuesta en aquella célebre polémica con Lombardo que hoy nos parece tan elementalmente preparatoriana.

El periodo cardenista transforma el distanciamiento en hostilidad. Si en los años de la autonomía la actitud gubernamental prevaleciente fue la de una indiferencia condescendiente, que entendió la autonomía como la cesión de una institución de importancia secundaria y fuente de escandalosas molestias, Cárdenas intenta, si bien de manera incompleta, crear frente a la universidad una alternativa. El peso que la industrialización y en general la transformación "moderna" de los aparatos y técnicas de producción tenía en el programa del cardenismo, exigía un componente de recursos de capacitación superior que la universidad "humanista", orientada a la formación para la práctica libre de las profesiones, no podía proporcionar. Pero no se trata sólo de una alternativa curricular, como diríamos hoy. La respuesta estatal, concretada en la concepción original del Instituto Politécnico Nacional, no sólo consistía en una definición distinta del "saber necesario", sino en un esquema original de reclutamiento de cuadros técnicos. A la espontaneidad naturalmente conservadora del acceso a los estudios superiores, se quiso enfrentar un sistema promocional, basado en las escuelas asistenciales para hijos de trabajadores, ya ensayado en la formación del maestro rural. En el primer IPN, proyecto tardío y esencialmente frustrado, el internado y la selección promocional eran tan importantes como el programa académico.

De manera dominante, en las universidades se profundiza el antagonismo hacia el proyecto estatal reformulado. Es verdad que algunas instituciones provincianas se definieron por el proyecto populista; la de Guadalajara, la Nicolaíta, el fugaz episodio de la Universidad Socialista del Noroeste en Sinaloa. Pero eran instituciones pequeñas; el peso de la Universidad de México y de otras como la de Nuevo León, en donde se llega a la intervención militar, se carga hacia la acción conservadora, y los centros de enseñanza superior actúan en mucho mayor grado como fuente de expresiones reaccionarias y manifiestamente profascistas que como base de la izquierda intelectual que por entonces se articuló en la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios.

LOS VERDES AÑOS

Si la recuperación de la universidad para el proyecto estatal es obra del régimen de Ávila Camacho, no es, sin embargo, fruto de una redefinición instantánea y

preconcebida. El desarrollo de un nuevo programa educativo se da de manera titubeante, partiendo de los propósitos centrales de conciliación y unidad nacional. Los dos primeros secretarios de

Educación fracasan en la construcción programática. Ni la breve experiencia de continuidad radical que encabezó Sánchez Pontón, ni la formulación reaccionaria de Vejar Vázquez, y la "escuela del amor" tenían viabilidad ideológica; habría que esperar a Torres Bodet para encontrar al ideólogo capaz de integrar la inspiración de los orígenes de 1921 con las exigencias del viraje iniciado con la sucesión presidencial de 1940.

Para la universidad, el acercamiento se concreta en la afirmación contenida en el informe presidencial de 1945: "han pasado los días en que una polémica inconveniente se empeñó en distanciar a la universidad de las autoridades. El Ejecutivo se congratula de ello". Meses antes, en diciembre de 1944, el presidente había enviado al Congreso la iniciativa que restituía a la Universidad de México su carácter nacional y fortalecía su régimen como organismo público.

La nueva época de la universidad se extenderá durante casi veinte años. La sólida correspondencia entre el desarrollo de la educación superior y las demandas de la sociedad y del Estado dieron entonces a las actividades de la universidad una armonía, un prestigio y una productividad sin precedentes. Ello no fue solamente, ni siquiera de modo esencial, resultado de la posibilidad de rearticulación abierta por el nuevo proyecto estatal, sino de la inserción de la educación en la dinámica de transformación del capitalismo mexicano, en lo interno, y en sus vínculos con el exterior, a la cual el programa avilacamachista se subordina, acoplándose a las tendencias dominantes sin la decisión programadora del cardenismo, pero sin abandonar la concepción activa y promotora del Estado interventor.

La funcionalidad de la universidad se construirá a través de tres vertientes principales: la relación con el aparato productivo y la división social del trabajo, con la composición cambiante de las clases sociales, con la formación de los intelectuales y la generación y difusión de la ideología.

Antes de revisar estos vínculos conviene situar las dimensiones del sistema de educación en el tramo de la nueva época. En 1940, entre quince y veinte mil estudiantes de licenciatura asisten a la Universidad Nacional, a seis instituciones públicas del interior y al naciente IPN. Para 1950, la matrícula es del orden de cuarenta mil, nacen los primeros Institutos Tecnológicos Regionales, se crean cinco universidades públicas

en los estados, y las instituciones privadas de élite, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Guadalajara, están firmemente implantadas. Para 1960, la matrícula llega a ochenta mil, surgen trece universidades en los estados y la red de Tecnológicos Regionales se extiende a nueve. Como se advierte, el sistema inicial es de minúsculas dimensiones y su rápido crecimiento relativo se mantiene, sin embargo, en una moderada magnitud, sobre todo si lo juzgamos con criterios de hoy.

Su tamaño modesto es uno de los factores de la efectividad de la universidad, frente a la dimensión de las transformaciones sociales y el espacio de acción que se abre a los universitarios. La expansión de la planta industrial, apoyada en la estrategia proteccionista de sustitución de importaciones, y el desarrollo asociado de la banca y los servicios fueron multiplicando los puestos técnicos y administrativos de dirección. Por su parte, los aparatos del Estado se diversificaron y expandieron: la salud pública, la obra de infraestructura física, las instituciones de crédito público, etcétera, ofrecieron nuevos campos de ocupación. Tanto para el tipo dominante de profesional, abogados, ingenieros, médicos, como para las nuevas especialidades de técnicos y administradores, el proceso amplió el espacio de las jerarquías altas e intermedias de la división del trabajo. No sólo eso; también la urbanización, la concentración de los ingresos y el crecimiento de viejos y nuevos estratos medios ampliaron la demanda de los servicios del profesionista libre, que vivió por entonces su mejor momento.

Este proceso tuvo un efecto significativo sobre la composición de la clase dominante. La población universitaria, surgida en su gran mayoría de la mediana y pequeña burguesía, encontró en la escolaridad superior una vía franca de movilidad y de incorporación a una burguesía en crecimiento. La selectividad del sistema estaba garantizada por el estrecho canal de la escuela secundaria, nivel que al empezar la década contaba con poco más de cien planteles. El valor en el mercado de empleo y el prestigio social de un título todavía escaso, frente al quantum de movilidad generado por el proceso seguido por el país, colocaron a los estudios universitarios en una inmejorable relación de costo-beneficio.

Otro aspecto de la situación es el de la formación de los intelectuales "orgánicos" y, de manera más precisa, de la burocracia política. Es entonces cuando la universidad asume una función clave en la formación y reclutamiento de nuevos cuadros de dirección estatal. Progresivamente, los mandos integrados por antiguos jefes militares y dirigentes de organizaciones de masas, se van renovando en la fuente de la universidad, singularmente en las escuelas de Derecho. La carrera que entrelaza al funcionario con

los liderazgos del partido oficial y de las organizaciones sociales corporativizadas se abre generosamente para los universitarios, con las oportunidades paralelas a que daba lugar el carácter fuertemente patrimonialista que desde el origen tuvo la burocracia pos-revolucionaria. La historia política de una generación que hoy parece estar llegando a su ocaso da testimonio de la profundidad de este proceso.

La capacidad para producir cuadros dirigentes es parte de la organicidad global que adquiere la ideología predominante en la universidad en relación con el discurso de la burocracia política. El idealismo poco riguroso y dado a la retórica con el que se estudia a la sociedad, al Estado y al Derecho, se ajusta con naturalidad a un discurso construido sobre los temas de la unidad nacional, el Estado por encima de las clases y gestor de su equilibrio y armonía, el progreso como destino colectivo y la educación como instrumento infalible del desarrollo. La universidad y los universitarios asumen un papel central en la transmisión y la continua recreación de esta ideología.

La nueva funcionalidad de la educación superior se expresa en la política estatal. El financiamiento, virtualmente congelado en los años treinta, adquiere nuevo impulso. El subsidio a la UNAM, de tres millones en 1940, pasa a catorce en 1952 y llega a 115 en 1960. Las instalaciones de Ciudad Universitaria, faraónicas al estilo de Miguel Alemán, son la mejor expresión del valor que se otorga a la universidad. Por su parte, los gobiernos de los estados prestan un apoyo semejante a la creciente red de instituciones del interior; no se iniciaba todavía la política de centralización de las relaciones políticas, financieras y de programación entre las universidades y el gobierno federal.

En el discurso gubernamental, la valorización de la educación superior es una constante: factor imprescindible de progreso, elemento civilizador, vía de la igualación social y al mismo tiempo del reconocimiento al mérito individual. Aun en el momento del primer conflicto grave con un centro educativo —el del Politécnico en 1956— la respuesta presidencial es más un reclamo paternal que una expresión de ruptura. Con las palabras del presidente Ruiz Cortines: "La actitud de los estudiantes también implica grandes responsabilidades. Tienen que emular a sus padres, aprovechar las enseñanzas que los maestros les imparten y corresponder, con su conducta, al sacrificio de sus padres y del pueblo que sufraga parte de su instrucción. Cualquier desvío de esta trayectoria lesiona no sólo los intereses de sí mismos, también el cumplimiento de sus deberes para con sus familiares y para con la colectividad" (VI Informe, 1958).

CONTRADICCIÓN Y CRISIS

En la década de los sesenta la armonía que ha gobernado el funcionamiento de la universidad entra en un rápido proceso de agotamiento, que culmina con el conflicto de 1968 y que se prolonga hasta el inicio del gobierno de Luis Echeverría.

La gestación de la crisis involucra a todas las funciones de la universidad, pero su manifestación abierta surge por el lado de las contradicciones políticas e ideológicas. Aunque en el proceso estuvieron presentes elementos como la alteración de las dimensiones del sistema y las transformaciones paulatinas de las pautas de reclutamiento social de los estudiantes y de su inserción en el mercado del empleo, es el surgimiento de posiciones ideológicas antagónicas al discurso estatal y de formas de movilización que se enfrentan a la disciplina social y a las prácticas políticas dominantes lo que constituye el hilo conductor de la ruptura universidad-Estado.

Las dimensiones de la lucha del 68 y su bárbaro desenlace han contribuido a que se deje a un lado el periodo que la precede, en el que se van desarrollando las contradicciones que estallan al final de la década. Es claro, sin embargo, que sin un análisis del periodo que arranca al final de los cincuentas y que coincide básicamente con el gobierno de López Mateos y los primeros años de Díaz Ordaz, el 68 sería un estallido azaroso e inexplicable. Es en esos años cuando se va gestando en sectores estudiantiles cada vez más amplios y en grupos de intelectuales una forma de conciencia que rompe la aceptación casi uniforme del orden social y de sus justificaciones y explicaciones ideológicas.

Aquí sólo es posible mencionar los factores cuya conjunción fue creando el clima intelectual del que surge la disidencia. En primer lugar, las luchas sociales de 1956-1959. En ese breve lapso, contra la calma de las dos décadas anteriores, perturbada por algunos conflictos graves, pero aislados, coinciden sin vincularse el movimiento estudiantil del IPN y el movimiento ferrocarrilero, la movilización sindical de los maestros del D.F. y las acciones de ocupación de tierras en el noroeste, que culminarían con la expropiación del latifundio de Cananea. Ninguno de ellos, tuvo una relación directa con sectores universitarios amplios, pero su efecto difuso y a largo plazo fue grande. El desarrollo de estas luchas y las diversas formas de represión a que fueron sometidas, mostraron la otra cara del milagro mexicano, la de quienes pagaban los costos de la estrategia de acumulación y estaban sujetos a los mecanismos estatales de subordinación y, llegado el caso, de represión ilimitada. Para cualquiera que siguiese con sensibilidad la vida nacional, la imagen idílica del progreso en la unidad había

sufrido una fractura irremediable; en sectores importantes de la universidad, la hegemonía ideológica se estaba desgastando.

Con las tensiones sociales de esos años, coinciden tres influencias ideológico-políticas: la reactivación de la izquierda, la extensión doctrinaria del marxismo y la revolución cubana. Es entonces cuando importantes corrientes de la izquierda abandonan la tesis central de "por la revolución mexicana al socialismo", fundada en una insostenible confianza en la potencialidad revolucionaria de la burguesía nacional y del Estado; de ello son evidencia el cambio de orientación del PCM, el surgimiento de los grupos espartaquistas y la radicalización activista de núcleos surgidos del lombardismo. La búsqueda de una línea propia en la izquierda es acompañada de una renaciente popularidad del marxismo. Se trata obviamente del marxismo "disponible": algunas obras de los clásicos, pero sobre todo los manuales soviéticos. Uno puede recordar hoy con horror los nombres de Nikitin y Afanasiev o Kuussinen, pero sería una injusticia expost despreciar su significado de entonces. Para una nueva generación este marxismo elemental fue el punto de partida de la fundación teórica y hasta moral de una forma radicalmente distinta de militancia política.

En este contexto, la experiencia de la revolución cubana tuvo profundos efectos. Su aliento heroico y romántico entusiasmaba, pero sobre todas las cosas, mostraba un socialismo posible aquí, a unos cientos de kilómetros de México. Después, las agresiones norteamericanas levantaron una oleada antimperialista, en la que se confundía la reivindicación de nuestro propio nacionalismo. Nada ilustra mejor esta articulación que las acciones del Movimiento de Liberación Nacional y la reaparición militante del último Cárdenas, con lo que parecía recuperación para la izquierda de la etapa mítica del régimen posrevolucionario.

Lo que la interrelación de estas influencias contribuyó a formar no fue una ideología coherente, sino lo que al principio fue una acumulación de motivos y orientaciones heterogéneos, bajo el signo común de una disidencia de izquierda: socialismo marxista, antiautoritarismo, reclamo moral por la justicia, rechazo a la simulación en la vida pública y nostalgia por el origen de una "revolución traicionada". De ahí, sin embargo, se desprendieron movimientos y dirigentes que en diversos momentos fueron importantes; muchos lo siguen siendo, dentro y fuera de la universidad.

En los años de gestación de la disidencia, hasta el año clave de 1966, la universidad fue fuente sólo de esporádicos conflictos. Ello se explica no sólo porque el proceso maduraba gradualmente, sino porque la línea general del gobierno de López Mateos

contribuía a postergar el enfrentamiento. La política de financiamiento fue relativamente generosa; en cuatro años duplica el apoyo a la UNAM e institucionaliza los subsidios a las universidades de los Estados. A ello se aúna la retórica vagamente izquierdista del régimen y una actitud de entendimiento que algo tiene que ver con el remoto pasado vasconcelista del presidente.

El estallamiento de la crisis en el gobierno de Díaz Ordaz tiene una causalidad múltiple. Están los factores más amplios, como las tensiones provocadas por la pérdida de dinamismo del patrón de acumulación y la rigidez creciente del sistema político, acentuada por la disposición intolerante y rencorosa del nuevo jefe de Estado. De manera más directa, influyó la orientación gubernamental hacia la educación superior. Es Díaz Ordaz, desde el principio de su administración, el que visualiza a la universidad como problema y no como objeto de estímulo indiscriminado y despreocupado. Dos son las reservas que aparecen expresamente: la alarma ante el crecimiento de la población universitaria y la consideración sobre el costo financiero que éste implicaría, de concentrarse en el sector estatal.

La primera cuestión remitía a una transformación profunda de las pautas del crecimiento de la educación superior. En los primeros cuatro años de la década, la población pasa de ochenta a 125 mil, como consecuencia de la acelerada expansión de la enseñanza secundaria y la inyección al flujo escolar que significó la ejecución del Plan de Once Años. La base del reclutamiento del nivel superior se ensanchaba enormemente y nuevos estratos sociales se incorporaban a la demanda educativa, hecho acentuado por la inexistencia de una función ocupacional de la enseñanza media frente a la realidad del mercado del empleo. Las proyecciones del gobierno, sorprendentemente precisas, estimaban que con las tendencias adquiridas, la matrícula llegaría a 705 mil en 1980.

Las implicaciones de este proceso alarmaban al gobierno: los riesgos políticos surgidos del aumento de la concentración estudiantil; los conflictos por la insuficiencia de empleo, como lo mostraba el movimiento de los médicos; y, de manera destacada, el costo económico. La expansión escolar reciente había obligado a elevar los subsidios federales de 258 millones en 1960 a 546 en 1964 y en 1966 Díaz Ordaz advirtió que la educación superior no podría seguir siendo gratuita y propuso diversas medidas de autofinanciamiento: colegiaturas diferenciales, constitución de patrimonios productivos, aportaciones de los particulares. Aunque tal política no se llevó a cabo sistemáticamente, definía de principio una actitud hostil y anunciaba la severa restricción financiera que se aplicó a las universidades a lo largo del sexenio. Como el

crecimiento de la matrícula no pudo ser contenido, llegándose a 225 mil alumnos en 1970, la restricción produjo un visible deterioro en las condiciones de enseñanza.

Simultáneamente, reaccionando ante las primeras acciones estudiantiles locales, el presidente tomó la defensiva. Descalificó las motivaciones y las prácticas de los universitarios y señaló, con inusitada crudeza, los riesgos que corrían quienes pretendían "inmunidad frente a la ley".

Esta línea política, ejecutada por un equipo burocrático que consideraba la negociación y las concesiones como una pérdida del principio de autoridad, llevó muy pronto a choques frontales. El conflicto médico de 64-65, aunque en muchos sentidos fue peculiar, anticipó lo que vendría. En 1966 se desarrollan las luchas de Sinaloa y Michoacán, en 1967 la de Sonora, a mediados de 1968 la de Tabasco. Todas ellas fueron disueltas mediante la intervención policiaca y militar y sólo representan los puntos más altos de una oleada de enfrentamientos de gran extensión; aun en el movimiento de 1966 en la UNAM, canalizado por grupos gubernamentales contra el rector Ignacio Chávez, actuaban corrientes de izquierda con una línea propia.

Las tendencias represivas estallaron contra el movimiento del 68 con una violencia que todavía hoy produce estupor. Frente a una opinión pública sacudida por la respuesta gubernamental, el régimen estaba obligado a dar una explicación justificativa. Primero fue la versión insistente de que se había actuado contra una conspiración antinacional que arrastró a la juventud inmadura; después, en busca de una salida en positivo, se sostendría la tesis de que en el fondo del asunto se encontraba la necesidad de una profunda reforma educativa. Esta afirmación, que en su momento fue sólo un último intento de autojustificación, sobrevivió como tema central de los años que siguieron.

En el momento de la sucesión presidencial de 1970, las consecuencias del 68 subsisten como problema político. El movimiento estudiantil ha sido derrotado como corriente nacional de masas, pero se sostiene con bases amplias en algunas instituciones, de donde surgirán después núcleos que adoptarán la línea del foquismo insurreccional. Junto a la acción de los sobrevivientes de la represión, la herencia más importante del conflicto es la separación y hostilidad pasiva de los universitarios e intelectuales progresistas hacia el Estado, situación que se mantiene viva, entre otras causas, por la cuestión de los presos políticos. Los primeros años del gobierno de Luis Echeverría, incluso su campaña electoral, estarán marcados por iniciativas, no siempre continuadas ni coherentes, orientadas a recuperar el consenso perdido en los años de la crisis y a reincorporar a la universidad a los proyectos estatales.

LA RECUPERACIÓN INESTABLE

En la década de los setenta el desarrollo de la universidad y de sus relaciones con el Estado se desenvuelve con esencial continuidad conforme a las líneas que se fijan en los primeros años del gobierno de Echeverría. Hay, por supuesto, modificaciones e innovaciones importantes, pero el rumbo general está determinado por cuatro orientaciones básicas: el impulso sostenido al crecimiento del sistema; la centralización de las relaciones económicas y políticas de las instituciones en el gobierno federal y no con los gobiernos locales; la aplicación de una política inductiva para la modernización de su organización administrativa y académica; y el establecimiento de mecanismos de control y negociación para regular los conflictos en los centros de enseñanza. Estas grandes líneas actúan sobre un contexto marcadamente inestable: de hecho, la aspiración de reestablecer una funcionalidad quebrantada coexiste con el despliegue de contradicciones de fondo en los vínculos entre universidad y sociedad que hacen inviable el retorno duradero a la armonía de la época dorada.

En el discurso estatal, la nueva política sólo tangencialmente se refiere a la necesidad de recuperar la dirección gubernamental. Los motivos centrales del discurso serán la aportación que la educación superior puede hacer al desarrollo económico y la función democratizadora implícita en la ampliación de las oportunidades escolares. Al tomar posesión de la presidencia, Echeverría afirmó: "México debe seguir preparando, desde su base, la construcción de una sociedad moderna. Para ello cuenta primordialmente con el poder de la escuela. Nuestros compatriotas tienen fe en la escuela. Le encomiendan el porvenir de sus hijos con la certidumbre conmovedora de quien —conociendo sus propias limitaciones— cree siempre en la nueva generación y confía en el progreso del hombre por medio de la cultura. No defraudaremos esa esperanza, porque es fuerza moral de la república".

La orientación de López Portillo no se apartó de estas líneas; su afirmación de que la expansión del sistema escolar constituye la primera responsabilidad del Estado y la reiterada tesis de que el país iría tan lejos como avanzara la educación, indican la vigencia de esta visión iluminista-modernizadora en la ideología gubernamental. Revisemos ahora las políticas realmente aplicadas.

El crecimiento del sistema es el factor más visible de la época y el de mayores consecuencias. La matrícula de un cuarto de millón de alumnos existente en 1970 llega

a 540 mil al final del gobierno de Echeverría y se eleva a 820 mil en 1979-80. Los tres subsistemas, universitario, técnico dependiente de la SEP y privado, crecen de manera relativamente homogénea, de modo que el primero sigue absorbiendo unos dos tercios de la población total. Los servicios de educación se extienden a ochenta localidades urbanas y sólo ahora se puede hablar de un sistema nacional, en el que, a pesar del vigoroso crecimiento regional, las instituciones de la zona metropolitana continúan absorbiendo a uno de cada tres alumnos.

El motor del crecimiento es el financiamiento federal. A precios corrientes, el modestísimo subsidio a las universidades de los estados, 104 millones en 1970 y el más sustancial a las del D. F., 1 050 millones, se convierten en 1 500 y unos 5 mil en 1976, respectivamente. Al final de la década, las cifras se elevan a 5 600 millones para los estados y 13 800 para la capital. Para las instituciones de los estados, esta política implicaba que los gobiernos locales pasaban a un papel de apoyo complementario y que la federación asumía la condición de "patrono" fundamental.

Este solo hecho significaba un cambio profundo en los vínculos de las universidades con el poder público. Si hasta finales de los sesenta la relación normal era con los gobiernos estatales, y con la federación sólo cuando se rompían los límites del orden público, el Ejecutivo Federal se convertía, progresivamente, en el sujeto primordial de la relación. Los problemas menores podían ser dejados a la resolución local, pero todo aquello que afectara la direccionalidad del sistema era materia de decisión central. Orgánicamente, el gobierno actuó hasta 1976 a través de la Dirección General de Coordinación Educativa y después mediante la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica y a lo largo de la década fue la Asociación Nacional de Universidades (ANUIES) el vehículo paraestatal para influir sobre las instituciones sin violentar abiertamente el principio de la autonomía universitaria.

La centralización del financiamiento y de las relaciones políticas eran instrumentos indispensables si lo que estaba en juego era la recuperación de la capacidad gubernamental para dirigir la vida universitaria. Con este propósito, el Estado actuó en dos grandes líneas: el impulso a la modernización y la utilización de nuevas formas de control político.

La aspiración a modernizar la universidad tiene su antecedente inmediato en la reforma de Barros Sierra en la UNAM y la reunión de la ANUIES en Hermosillo (1970). Pero será sólo después de un periodo de confusión e iniciativas frustradas, que el régimen logre asimilar esas experiencias y establecer un programa y una estrategia de reforma,

cuya primera expresión fue la propuesta de la ANUIES en Villahermosa (abril de 1971) en la que se combinaban dos tendencias que pudieron coexistir fugazmente: la del reformismo democrático que representaban Pablo González Casanova y su proyecto de transformación para la UNAM, y la orientación mucho más pragmática de modernización dirigida, en la que coincidían los mandos de la SEP y el sector mayoritario de la burocracia universitaria. La salida de González Casanova de la rectoría pronto eliminó la inicial ambivalencia de la política de reforma.

Las asambleas de la ANUIES que se efectuaron en los años siguientes fueron configurando una propuesta reformista para la organización académica y administrativa de la educación superior: el esquema departamental, el sistema de créditos, las salidas laterales, la programación por objetivos, la sistematización de la enseñanza y el programa de formación de profesores fueron sus líneas básicas. Junto con ello, se crean instituciones nuevas, como la Universidad Autónoma Metropolitana y el Colegio de Bachilleres, en cuya concepción inicial se plasmaba ejemplarmente la nueva orientación.

El gobierno de López Portillo introdujo modificaciones en la política de reformas. Resultaba evidente entonces que una estrategia de modernización que descansaba en mecanismos inductivos había logrado resultados limitados y desiguales, en muchas cosas reducidos al cambio nominal. A partir de 1978

se crearon, como instrumentos de mayor potencialidad coactiva, la Ley de Coordinación de la Educación Superior y una red de instancias de planeación y decisión, en los niveles institucional, estatal, regional y nacional. El propósito, que se concretó en el Plan Nacional de Educación Superior, era dar al sistema una orientación central y coherente, que integrara la actividad de las instituciones autónomas con las dependientes del gobierno federal y que se encuadraba en la perspectiva expansionista producida por la euforia petrolera.

Es difícil valorar los resultados de la política de modernización. La política gubernamental obtuvo en la década logros importantes, pero en muchos casos fue bloqueada y resistida y en otros aplicada formalmente, sin modificar la orientación y el sentido de la práctica pedagógica y de la formación profesional. El puñado de universidades y escuelas dirigidas por la izquierda se enfrentó a la modernización defensivamente, bajo el lema persistente de la "educación democrática, crítica y popular", que no cristalizó cabalmente en un auténtico proyecto alternativo, pero la resistencia mayor, aunque menos visible, provino de los sectores universitarios

conservadores, formados en la rigidez de la práctica tradicional y cuyos grupos dirigentes encontraban en muchas de las reformas modernizadoras el riesgo del rompimiento del status quo y de la irrupción de fuerzas transformadoras.

El propósito estatal de recuperar el consenso y el control de la universidad se desarrolló en múltiples formas. En un primer momento, el movimiento estudiantil fue la preocupación fundamental, enfrentada con una estrategia dual de cooptación y represión. La política de diálogo directo, concesiones y dádivas desmovilizó a muchos núcleos de un movimiento en reflujo; para los sectores radicalizados que optaron por la confrontación, la respuesta fue la represión, como lo mostraron los casos de Sinaloa, Sonora y Chihuahua. A finales de 1973, la oposición estudiantil había sido neutralizada. Frente a los intelectuales críticos del Estado, el régimen echeverrista tuvo un éxito notable, quizá el más importante en la estrategia de la "apertura democrática", que tan poco espacio concedió a las organizaciones políticas y sindicales. El acercamiento gubernamental les abrió espacios en la administración estatal, o toleró ampliamente una labor de crítica y de elaboración teórica marxista, mientras no se trasladase al terreno de la acción. La incorporación o cuando menos la neutralización de la disidencia intelectual se apoyaba en el lanzamiento de programas de sesgo popular, en el discurso antimperialista y tercermundista, en el recurrente enfrentamiento verbal del presidente con la burguesía, que daban al régimen una imagen distinta, vinculada a la tradición más radical del Estado posrevolucionario.

El gobierno de López Portillo, cuyo empeño rectificador de los excesos populistas muy poco podía convocar a la intelectualidad de izquierda, mantuvo sin embargo el clima de apertura. Su versión del 68 como una "crisis de conciencia", casi un mal sueño que no debería repetirse, su disposición a negociar con las fuerzas de oposición y la limitada reforma electoral contribuyeron a preservar una relación "correcta" entre el Estado y los medios intelectuales.

Junto a estas estrategias amplias, el régimen requería de instrumentos de control cotidiano, preventivos del conflicto y no sólo reactivos entre sí. En esta dirección, una primera medida fue el fortalecimiento de burocracias profesionales en las universidades, que desplazaron o reconvirtieron las antiguas formas de liderazgo poco formalizadas, dando origen a vastos y onerosos aparatos de administración. A estas burocracias correspondieron las funciones de la represión preventiva, la "despolitización" de la planeación y la toma de decisiones, la negociación de cúpula.

El otro campo de acción estatal fue el jurídico, con el objetivo central de regular

restrictivamente la actividad de los sindicatos, la más vigorosa fuerza surgida en la universidad de los setenta y que en su sector académico recogió y transformó muchas de las experiencias más sólidas del antiguo activismo estudiantil. Las iniciativas legales del poder ejecutivo de 1979 y 1980 responden a la lucha que a lo largo de la década enfrentó a los militantes de la sindicalización con las burocracias conservadoras de la universidad, con los sectores académicos más tradicionalistas o más ligados al gobierno y la empresa privada. Las modificaciones a la ley, en particular la reglamentación del trabajo en las universidades, muestran cómo la necesidad del control institucional fue significativamente matizada por la relación de fuerzas que la movilización sindicalista había logrado crear. Los derechos laborales básicos fueron reconocidos, pero se negó legitimidad a la organización nacional, transinstitucional, de los trabajadores y no se legisló sobre el ingreso y promoción del personal, lo que dejó abierta la posibilidad de que, manejando los procedimientos a su arbitrio, las burocracias conservaran en sus manos la pieza clave del control institucional.

Un balance inicial de la política de recuperación del control y de la capacidad de dirección indica un amplio y diversificado avance estatal, que sin embargo no es particularmente firme, ni mucho menos general. En muchas instituciones lo más que se logró fue el consenso pasivo, resguardado por una política permanente de vigilancia y represión preventiva, de intensa burocratización de la vida interna. En otros casos, ahí donde las corrientes de izquierda acumularon fuerza y organización, el gobierno se vio obligado a reconocer orientaciones distintas a la propia. Al final de la década, el proceso tenso y complicado de relación entre el Estado y los núcleos disidentes había llevado al reconocimiento de la legitimidad de la dirección total o parcial de la izquierda en media docena de universidades.

En su conjunto, la política estatal de desarrollo de la educación superior en los setenta parece razonablemente exitosa. Crecimiento rápido del sistema, creación de los instrumentos de la modernización dirigida, reducción del conflicto o cuando menos su contención en instituciones localizadas, dan cuenta de una sustancial realización de los propósitos gubernamentales. Sin embargo, el proceso tiene una base inestable, porque ha sido acompañado por el debilitamiento de las funciones centrales que la educación avanzada había cumplido en su relación con la estructura social: la de vehículo de reproducción legitimada de las posiciones sociales preexistentes y de canal de movilidad selectiva, y la concomitante, de asignación de "lugares" en la división social del trabajo y en la jerarquía de las relaciones de poder.

Un crecimiento como el experimentado durante la década tenía necesariamente que cambiar las pautas de reclutamiento social de la población universitaria. El simple dato de que, comparada con el grupo de edad de 20 a 24 años, la matrícula haya pasado de representar el 5.8% en 1970 a casi el 14% al final de la década, indica que nuevos estratos se incorporaron a la demanda educativa real, situación que había tenido su fase inicial desde los sesenta. Ciertamente, la licenciatura no se volvió democrática, en la acepción liberal de la igualdad de oportunidades, y en ningún lugar fue predominante la presencia de estudiantes surgidos del proletariado y el campesinado. El hecho de que la mitad de la población inscrita por primera vez en el sistema fuera expulsada antes de terminar la enseñanza primaria, fijaba límites inflexibles a las aspiraciones democratizadoras. Sin embargo, otros sectores de clase lograron acceso creciente al nivel superior. Alumnos originarios de los nuevos estratos asalariados de los servicios y los aparatos gubernamentales, de las fracciones organizadas y con mayores ingresos de la clase obrera, del campesinado medio, o la figura cada vez más común del trabajador-estudiante, dieron a la universidad un marcado, novedoso componente plebeyo. La vieja exclusividad burguesa y pequeñoburguesa ilustrada había pasado a la historia.

La disminución de la capacidad selectiva se corresponde con la devaluación de los títulos en el mercado del empleo. En la década, la "producción" del sistema se duplica, hasta alcanzar los cien mil egresados por año. A pesar de que se trata de un periodo de crecimiento económico importante, las oportunidades de empleo correspondientes al nivel superior aumentaron con mayor lentitud, fuertemente ligadas a la inflación del sector terciario y en particular a la expansión del aparato gubernamental. En el sector industrial, el tipo de tecnología utilizada y la resolución desde el exterior de los requerimientos técnicos más complejos, mantuvieron la demanda de cuadros por abajo del egreso universitario. Existen numerosos indicios de que la educación de los nuevos universitarios entró en un proceso de desplazamiento hacia abajo, expulsando a la mano de obra con menor escolarización. El nivel de ingresos relativos se redujo, aunque conservara un diferencial significativo respecto a estratos de menor educación formal, y se hicieron cada vez más frecuentes fenómenos como la subocupación "cualitativa", la prolongación de los periodos de espera para el ingreso al empleo y la transferencia hacia labores sin relación con la capacitación supuesta.

Los dos procesos produjeron algunos efectos inmediatos. El rápido desarrollo del posgrado refleja, quizá en mayor grado que una necesidad real de especialización, un esfuerzo por crear una instancia de revalorización de los títulos, mientras por otro lado

las instituciones privadas de élite reforzaban su función discriminante frente a una licenciatura pública masificada, función análoga a la cumplida por los estudios realizados en el extranjero.

A pesar de todo, la estrategia estatal mantuvo al sistema en una dirección expansionista. No creo que se ignoraran las contradicciones que se desenvolvían entre educación superior y sociedad; en particular parece existir plena conciencia de que el producto escolar excede a las necesidades "objetivas" del aparato productivo tal como existe. Sin embargo, las contradicciones de fondo fueron subordinadas por las exigencias ideológicas y políticas a las cuales da respuesta la expansión. No sólo se trata de la necesidad de corresponder a un discurso construido sobre las nociones del proceso modernizador y de la democratización por la escuela; la educación superior es un vínculo material entre el Estado y los sectores de clase que conforman la demanda posible. La integración subalterna de estos sectores al bloque en el poder sería precaria si no fuera por el "factor esperanza", por la transferencia de expectativas hacia la nueva generación que dependen de las oportunidades de estudios universitarios.

Sostener la política de fomento y expansión frente al debilitamiento funcional del sistema fue posible porque el Estado dispuso de los recursos financieros necesarios. El endeudamiento público y las perspectivas abiertas por el auge petrolero aseguraron una corriente de inversión y gasto que soportó el desarrollo de los estudios superiores. Sólo si este elemento se mantiene podrá postergarse el despliegue de las contradicciones que minan la vinculación universidad-sociedad.